

Todo en Chiapas es América Latina

Diana Guillén

Resumen

La problemática en Chiapas condensa buena parte de las contradicciones que el neoliberalismo ha provocado en los países latinoamericanos. Descubrir las raíces del conflicto chiapaneco, reconocer la manera como se engarzan en la coyuntura los añejos problemas con los nuevos, definir a las fuerzas sociales en pugna y el proyecto político que defienden, mostrar el proceso de lucha campesino-indígena y las causas del desgaste y frustración que orillan a numerosas comunidades a optar por la lucha armada; son todos ellos, elementos que la autora maneja para analizar el conflicto chiapaneco. La comprensión de éste es útil para todos los latinoamericanos.

Abstract

The contradictions created in latinamerican countries as a result of neoliberalism are summed up by the problems faced in Chiapas. The elements the author handles to analyze and evaluate the roots of the conflict, establishing the way in which the problems faced in the past entangle with those faced in the present date, defining the social forces in conflict and the political project which they fight for, demonstrating the ways in which the natives and peasants try to achieve their purposes, and the causes of attrition and frustration that lead the various communities to opt for armed struggle. Understanding these issues is useful for all latinamericans.

Durante los años setenta el gobierno mexicano difundía por todo el país: "¡Todo en Chiapas es México!", frase con la que invitaba a conocer ese estado, pero con la que también aludía a la concentración en él de las bellezas naturales y las potencialidades económicas de todo el país. A más de dos décadas de distancia, Chiapas resultó ser, paradójicamente, el espacio donde se concentra nítidamente la crisis nacional. Y más allá de las fronteras mexicanas, si recorriéramos el resto de la geografía latinoamericana, encontraríamos que la situación chiapaneca no es única, aunque sí una de las más dramáticas. Con orígenes y desarrollos particulares, con mayor o menor intensidad, el continente entero sufre los efectos de un modelo económico que no cumplió su promesa de llevarnos a la modernidad y, por el contrario, profundizó nuestros añejos rezagos y aceleró las contradicciones. Si desde una perspectiva distinta aceptamos la tan reiterada frase oficial dedicada a Chiapas, ahora en los años noventa bien podríamos decir que ¡Todo en Chiapas es América Latina!

Después del 1º de enero de 1994, la pertinencia de volver la mirada hacia Chiapas y de enmarcarla en el contexto latinoamericano no necesita de largas y elocuentes frases que la justifiquen: la sangre derramada ya se ha encargado de ello. A escasos años de que concluya el siglo XX, el sureste mexicano emerge como foco de atención para el conjunto de nuestra América; simbólica y

materialmente se convierte en un espejo capaz de reflejar las deformaciones que esconden proyectos compartidos regionalmente. El maquillaje modernizante ha sido insuficiente para esconder las tendencias que recorren el área y que en esta ocasión se manifiestan nitidamente en los confines de la selva lacandona.

Con la última de las campanadas que cerraban 1993 y las uvas que apurábamos para festejarlo, se dibujó en el horizonte continental un movimiento que imprimía matices de fondo a la gastada frase "año nuevo, vida nueva". La estabilidad del régimen mexicano y las bondades de sus coqueteos con el primer mundo fueron cuestionados con las armas en la mano, echando por tierra los esfuerzos que, durante las últimas décadas, se habían realizado desde el gobierno para acercarnos al Norte. El Sur se hizo presente a través de la frontera mexicana y, sobre todo, se eliminó cualquier duda sobre los efectos perversos de un modelo de desarrollo que ha significado exclusión y pobreza para buena parte de los latinoamericanos.

De pronto la línea que separa a México de Centroamérica recobró el carácter que había tenido desde la anexión de Chiapas a nuestro país: las realidades que delimita tienden a unirse más que a alejarse. Si rastreamos lo sucedido en este punto durante los últimos años, encontraremos que todavía al iniciar la década de los setenta parecía predominar la idea de que la única frontera importante era la norte.

A mediados de 1970 la cercanía con el conflicto istmico cristalizó en la incursión de rebeldes guatemaltecos que huían del ejército. Aunque la noticia fue desmentida telefónicamente por la XXXI Zona Militar con base en Tuxtla y por el XXIX Batallón de Infantería acantonado en Tapachula (27 y 29 de julio), al tiempo que la Secretaría de la Defensa Nacional negaba tener informes al respecto (28 de julio), estábamos prácticamente ante las primeras manifestaciones de la extensión de la guerra centroamericana a nuestro país; resulta sintomático que la información se manejara en estos términos.¹

En 1981 el presidente José López Portillo definía a Centroamérica como zona convertida en frontera, de la que nuestro país aún quedaba fuera; en 1982, cuando la guerra en el área trascendió sus límites iniciales y el ingreso masivo de refugiados puso de relieve las implicaciones de una vecindad durante tanto tiempo olvidada, el centro volvió los ojos hacia el sur y el entonces candidato a

¹ *Excelsior*, México, 27-29 de julio de 1970; "Campesinos de Guatemala perseguidos hasta Chiapas", en semanario *Proceso*, México, 2 de marzo de 1981; Jorge E. Rodríguez, "En 96 horas se determinó que los refugiados no eran perseguidos", *Proceso*, México, 1º de junio de 1981, pp. 6-8; "Los problemas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, juntos en Chiapas", *Proceso*, México, 22 de marzo de 1982, pp. 12-17; Ignacio Ramírez, "Tropas guatemaltecas siguen entrando en Chiapas a buscar guerrilleros", *Proceso*, México, 5 de abril de 1982, pp. 14-17; Juan Balboa, "Violación sistemática del territorio por el ejército guatemalteco", *Proceso*, México, 7 de mayo de 1984, pp. 14-17.

la Presidencia, Miguel de la Madrid, además de declarar que México era un país frontera, señaló en su campaña electoral: "No creo que podamos alejarnos de los problemas de Centroamérica. La geografía nos ha hecho vecinos y físicamente es imposible alejarnos de los problemas de Centroamérica".²

A la larga, y conforme se recrudecían los problemas en la zona vecina, se hizo presente en todas sus dimensiones el carácter fronterizo de estados que, como Chiapas, se habían acostumbrado a ver en la línea divisoria una especie de formalidad con poca incidencia sobre la vida cotidiana de los habitantes; en el fondo, los límites políticos no lograban romper un paisaje que siglos previos de historia común habían unificado. Los lazos que vinculaban ambos extremos iban desde las relaciones consanguíneas de sus pobladores, hasta imbricados tejidos comerciales y productivos, pasando por la unidad cultural de la región.³

Muchos de estos elementos persisten a pesar de que durante la década de los ochenta se inició de lleno la recuperación de la línea fronteriza en términos de línea divisoria, como parte de un discurso oficial interesado en resaltar las diferencias entre nosotros y ellos. Es verdad que la región amplia en la que Chiapas sería una continuación de Centroamérica ha sufrido ciertas fracturas; más allá del nivel discursivo y de las necesidades emanadas en el centro del país, quienes habitan en el área resintieron los efectos de la cercanía con los problemas centroamericanos y ello contribuyó a legitimar las acciones gubernamentales encaminadas a resaltar las diferencias⁴; sin embargo, en el fondo nunca se logró romper por completo las añejas identidades.

En otras palabras, la situación de Chiapas se ha asemejado desde siempre a la guatemalteca, pero la profundización de los problemas centroamericanos obligó al gobierno de México a resaltar las distancias entre una y otra y a tomar medidas que las hicieran patentes. Se apoyó un gran juego de prestidigitación

² *Monografía del estado de Chiapas*, México, Secretaría de la Presidencia, 1983.

³ Al menos hasta la revolución de 1910, mucha gente de las localidades fronterizas con capacidad económica para hacerlo, prefería estudiar en Guatemala que trasladarse a otros estados de la República (Oaxaca, por ejemplo) o a la capital mexicana. Asimismo, hasta épocas recientes poco importaba que formalmente hubieran oficinas de migración (incluso existían franjas sobre las que las autoridades carecían de control) e imperaba una especie de libre tránsito que de alguna manera se extendía al comercio y que en la zona cafetalera del Soconusco resolvía las necesidades de fuerza de trabajo con los campesinos que se trasladaban temporalmente desde Guatemala.

⁴ Además de las repercusiones estrictamente militares que pudiera haber provocado en México el conflicto centroamericano, la presencia de los refugiados trajo consecuencias económicas y sociales importantes. En una entidad con altos índices de marginación, el crecimiento demográfico significó, entre otras cosas, una disminución en la ya de por sí precaria calidad de vida. Cfr. Mario Ruiz Redondo, "Riesgo para la salud en Chiapas, la salud de los refugiados: ops", en *Excélsior*, México, 10 de julio de 1983; Alfredo Córdova, "Condenan los militantes de la CLPCH la débil política del gobierno de Chiapas", *Excélsior*, México, 7 de agosto de 1984; "Amenaza la crisis económica al orden social: MM", en *El Universal*, México, 18 de octubre de 1985.

que magnificaba la estabilidad de los gobiernos mexicanos posrevolucionarios y que pretendía integrar en el conjunto de los mismos al sureste, región con la que tradicionalmente había mantenido vínculos más bien distantes.

El discurso oficial empezó a reclamar la pertenencia de la zona fronteriza e intentó fortalecer la identidad de sus habitantes con la nación mexicana, haciendo a un lado los casi dos siglos de aislamiento y abandono que habían prevalecido y fingiendo una homogeneidad nacional que estaba lejos de existir. Sin cambiar en lo fundamental el estado de cosas que había mantenido a Chiapas fuera de buena parte del desarrollo seguido en otros lugares de la República y que había favorecido el mantenimiento de todo tipo de vínculos con Centroamérica, especialmente con Guatemala, se buscaba invertir la correlación de fuerzas en la definición de identidades: México se hacía presente como nunca antes, y además de mostrar su interés a través de planes de desarrollo para la zona, se enviaban destacamentos de soldados que tal vez no militarizaban por completo la frontera,⁵ pero que hacían patente a quien correspondía el monopolio de la violencia sobre el área.⁶

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se encargó de mostrar la fragilidad de esta integración forzada y en unos cuantos días sacó a la luz el lamentable estado en el que viven buena parte de los chiapanecos.

⁵ Antes del 1° de enero de 1994 el gobierno mexicano se había negado a aceptar las presiones hechas desde Guatemala para que la frontera se militarizara, pero también antes de esa fecha la idea había empezado a tener eco en algunos sectores de la sociedad local; resulta sintomático que en lugares como Metapa de Domínguez, se solicitara al presidente municipal mejoras a la seguridad de la región militarizándola. Por otro lado, el aumento de soldados en la zona era evidente conforme avanzaba la década de los setenta y no parece obra de la casualidad que el general Absalón Castellanos llegara a la gubernatura del estado; por el contrario, todo parece indicar que las fuerzas represivas se habían convertido en sujetos indispensables para la vida local y que su papel se enmarcaba, por un lado, en la conflictiva situación interna y en el aumento de los movimientos sociales y, por el otro, en el carácter fronterizo de Chiapas. Cfr. Leonel Durante, "Incursionan en Chiapas helicópteros artillados de Guatemala", en *El Universal*, México, 1° de febrero de 1988, y "Solicitan la militarización de la frontera sur", *El Universal*, 18 de febrero de 1988; "En la frontera sur de México no operan grupos subversivos armados de Guatemala", en *Uno Más Uno*, México, 20 de junio de 1985; Bertha Fernández, "Argucias de EU para que México militarice su frontera Sur", en *El Universal*, México, 19 de enero de 1986; J. Herrera y L. Hernández, "Aterroriza a Chiapas la tropa guatemalteca", en *Excélsior*, México, 24 de enero de 1988; "Rechaza Ramírez Garrido Abreu la militarización de la frontera sur", en *El Universal*, México, 6 de noviembre de 1992.

⁶ Por lo demás, es en esta línea que parece tomar fuerza el concepto de seguridad nacional, aunque en el caso de México adopte una perspectiva diferente de aquella que guió los golpes militares que se iniciaron en 1964 en Brasil y que se extendieron por buena parte del Cono Sur en las décadas pasadas. Nuestro país incorpora en su discurso oficial la vigencia de un régimen de garantías y la realización de un conjunto de objetivos sociales para sustentar así la seguridad de la nación en la fortaleza de las instituciones públicas, situación que deja en posición subordinada a la violencia como mecanismo para mantener el orden. Cfr. Ernesto Azuela, "Cultura, política y frontera", en *El redescubrimiento de la frontera Sur*, México, Ancien Régime, 1989, pp. 33-35.

Las hondas raíces del conflicto

De atenernos al discurso oficial, el 1º de enero de 1994 México ingresaría a la modernidad. Se suponía que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y Canadá permitiría superar atrasos heredados de un pasado difícil y se convertiría en una especie de garrocha que nos impulsaría hasta colocarnos en el mismo nivel de nuestros flamantes socios. Quienes trataron de alertar sobre los peligros que esta visión entrañaba fueron tachados, en el mejor de los casos, de pesimistas irredentos y, en el peor de ellos, de malintencionados que buscaban desestabilizar al país.

El tiempo dio, sin embargo, la razón a los opositores de un proyecto que, con distintos matices, se ha ido imponiendo a lo largo del continente; el TLC representa la punta de un iceberg cuyo cuerpo está formado por las políticas de ajuste y los programas de acción neoliberales. En mayor o menor grado, los distintos Estados latinoamericanos han volcado buena parte de sus energías al saneamiento de una economía que, al paso de los años, se muestra incapaz de sostener su balanza de pagos y de resolver al mismo tiempo sus necesidades internas. A pesar del poco éxito conseguido por los programas cambiarios, fiscales, crediticios y salariales que han buscado mejorar los indicadores macroeconómicos a costa del bienestar social, su filosofía sigue imperando y su adopción se ha convertido en requisito indispensable para conseguir el apoyo de los organismos de financiamiento internacional,⁷ los cuales recurren a teorías que justifican los elevados costos sociales en aras de una supuesta planeación a largo plazo que conducirá a las economías nacionales por caminos más modernos.⁸

En este marco, es muy probable que los futuros estudiosos de la historia latinoamericana analicen el 1º de enero de 1994 en un sentido inverso al previsto: lejos de marcar el fin de una etapa premoderna para México, la fecha simbolizará el conflicto que existe entre las estructuras y prácticas tradicionales propias del paisaje continental y la modernización que se les ha pretendido superponer artificialmente. En el movimiento armado con el que se inauguró el año confluyen contradicciones que rebasan las fronteras nacionales, con otras tantas propias de un régimen que se ha beneficiado de las relaciones oligárquicas, aun cuando su momento fundacional remita al ocaso del orden en el que éstas últimas surgieron.

Desde tal perspectiva, las raíces estructurales del conflicto chiapaneco tendrían que buscarse en un plano que va más allá de los límites locales (la inequidad

⁷ Pedro Vuskovic. "Economía y crisis", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina, hoy*, México, Siglo xxv/Editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, 1990.

⁸ David E. Apter, *Una teoría política del desarrollo*, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 63-64.

social favorecida por el marco neoliberal y la pervivencia de patrones oligárquicos capaces de sobrevivir movimientos como el mexicano de 1910), pero sus manifestaciones particulares deben rastrearse en el entrecruzamiento de las historias estatal y nacional.

Para entender la coyuntura actual, tendríamos pues que empezar recordando el abandono en el que se ha mantenido a Chiapas desde su anexión a México. Cuando en la primera década del presente siglo estalló la Revolución, el sureste se encontraba muy lejos de los escenarios en los que tenía lugar el enfrentamiento armado: a la distancia que físicamente lo separaba del centro del país, se sumaban los deficientes medios de comunicación que existían entre ambos puntos.⁹ En tales condiciones, la lucha directa que devastó a varios estados de la República y que involucró a grandes contingentes de la población, pasó prácticamente desapercibida en el medio chiapaneco. A la caída del general Porfirio Díaz hubo cambios en la burocracia que dirigía las riendas de la entidad, pero mientras hacia 1911 el centro y el norte del país se preparaban para una cruenta guerra civil, los chiapanecos utilizaban las armas para determinar el lugar en el que tendría que establecerse la capital.

La revolución dejaría sentir sus primeras consecuencias importantes en Chiapas hasta el ascenso del carrancismo (1914), cuando el general José Agustín Castro se hizo cargo del gobierno del estado. El emisario del centro llegaba acompañado de su famosa División Veintiuno y la presencia de las tropas federales motivaba entre la población sentimientos de disgusto y de rechazo hacia lo que se sentía como una agresión por parte de las autoridades recién instaladas en la sede de los poderes federales.

Castro representaba el ala radical del constitucionalismo¹⁰ y entre las medidas que adoptó en la entidad, destacó su intento por legislar las relaciones laborales. Ello implicaba un fuerte golpe para la oligarquía chiapaneca, que no tardó en acusar recibo del mismo. La rebelión que encabezó a partir de entonces Tiburcio Fernández Ruiz, condensaba la defensa de dos tipos de privilegios: los que provenían de una autonomía que la desvinculación de Chiapas con el resto del país había propiciado, y los que resultaban de la organización social vigente. Para buena parte de los integrantes de la élite local —que en ese momento hicieron a un lado las diferencias regionales que los separaban y que años antes los habían llevado a un enfrentamiento armado—, el rechazo a la intromisión del

⁹ Todavía a finales de los años veinte y principio de los treinta, se hacían tres días con sus respectivas noches entre la ciudad de Comitán y la de México. *Entrevista a Enrique Culebro*, ciudad de México, agosto de 1990.

¹⁰ Allan Knight, *The Mexican revolution*, Cambridge University Press, 1986 (Cambridge Latin American Studies núm. 54), pp. 236-240.

general Castro era cuestión de supervivencia y, por ello, se levantaron en armas al rescate de su soberanía y del sistema de dominación que sus ancestros les habían heredado.¹¹

El movimiento no se circunscribió al reducido núcleo de la élite y a pesar de que las medidas tomadas en nombre del carrancismo beneficiaban a amplios sectores de la población, éstos tuvieron poco tiempo para acostumbrarse a la libertad recién anunciada. Hubo lugares en los que los indios ofrecieron su ayuda al nuevo gobierno y aprovecharon la situación para cobrar viejas deudas, pero en las regiones en las que las relaciones serviles estaban hondamente arraigadas y los patronos intercambiaban protección por lealtad con sus sirvientes, la resistencia tendió a fortalecerse y a incluir entre sus miembros a los aliados teóricos de la revolución.¹²

De hecho, la Ley de Obreros que había motivado la insurrección carecía de una estructura que permitiera la inserción de los mozos liberados en un mercado de trabajo libre o que los dotara de la tierra y el capital suficientes para mantenerse por su cuenta; de allí que, no obstante su espíritu progresista, los beneficios de la nueva legislación se vieran en la práctica reducidos y el campesino siguiera dependiendo de los dueños de las haciendas para sobrevivir.¹³

En tales condiciones, los desposeídos lejos de incorporarse en masa a las filas del carrancismo, tendieron a rechazarlo de la misma forma que los amos lo habían hecho.¹⁴ El *levantamiento mapache* –nombre con el que genéricamente se le conoce porque sus integrantes operaban de noche y comían maíz crudo en los campos– tuvo altibajos y sufrió algunas escisiones que remiten sobre todo a rivalidades personales entre sus líderes, los cuales a pesar de adherirse a las

¹¹ Si bien no todos los finqueros lucharon contra Castro e incluso algunos de ellos se unieron al gobierno carrancista instalado en Tuxtla Gutiérrez, creemos –a diferencia de Benjamín Thomas y de Paul Garner– que la rebelión contra Castro representaba un rechazo estructural de la élite hacia las transformaciones que éste proponía y, por lo tanto, el llamado *mapachismo* no fue una respuesta marginal y aislada, aun si sus principales representantes estaban territorialmente vinculados con ciertas zonas del estado. Véase Benjamin Thomas and Paul Garner, "Parochial rebellion in southern Mexico: the sovereignty movements of Oaxaca and Chiapas, 1914-20", Preliminary Draft for Presentation at the VIII Conference of Mexican and North American Historians, San Diego California, October 1990, p. 18.

¹² Antonio García de León, *Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*, 2 vol. México, Ed. ERA, 1985, pp. 56-58.

¹³ Prudencio Moscoso Pastrana, *El pinedismo en Chiapas, 1916-1920*, México, Ed. Cultura, 1960, pp. 23-24.

¹⁴ Alicia Hernández Chávez, "La defensa de los finqueros, 1914-1920", en *Historia Mexicana*, vol. XXVIII:3 (III), enero-marzo, 1979, pp. 357-359; Mario García S.J., *Soconusco en la historia, geografía, etimología, etnografía, arqueología, estadística, producciones*, México, s.e., pp. 263-267; Serrano, Santiago, *Chiapas revolucionario (hombres y hechos)*, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, s.e., 1923, pp. 11, 12, 25 y 33.

distintas fracciones que luchaban contra el carrancismo en el plano nacional (villistas, obregonistas, felicistas, etcétera), compartían el proyecto de una sociedad conservadora en la que estuvieran asegurados (para ellos, por supuesto) la tierra, el trabajo y la autonomía.¹⁵

Finalmente la balanza de las fuerzas revolucionarias se inclinó en contra de Carranza, y a pesar de no compartir la mayor parte de los principios inherentes a la revolución, aquellos que se habían caracterizado por su tradicionalismo recibieron los beneficios de la misma cuando ésta cambió de dirigentes.

A la caída del primer jefe, quienes habían colaborado con él se convirtieron en enemigos del nuevo régimen, mientras que los que se le habían opuesto podían contar con la posibilidad de integrarse al gobierno obregonista. Precisamente esto fue lo que sucedió en Chiapas, donde los miembros de la familia que en la etapa previa habían tomado las armas para sostener sus privilegios, se convirtieron de la noche a la mañana en aliados del dirigente revolucionario que en ese periodo hegemonizaba el proceso y, por ende, en representantes del movimiento en el ámbito local. El triunfo de Alvaro Obregón significó el reconocimiento de los antiguos *mapaches* como el grupo más representativo del sentir regional y su consecuente legitimación como depositarios del poder que se instauraba en el plano federal.¹⁶

Contrariamente a que al amparo de la revolución naciera una nueva élite política, la posibilidad de que los viejos hacendados se convirtieran en herederos de la revolución constituyó uno de los tantos matices regionales de las transformaciones que tenían lugar en el conjunto del país. Mientras en otros estados el poder cambiaba de manos, en la entidad lo conservaban los grupos ligados al porfiriato, quienes lejos de ser derrotados se consolidaban.¹⁷

El nuevo régimen nacía en medio de conflictos potenciales, ya que sólo en las zonas indígenas se mantenían intactos los viejos canales de sujeción.¹⁸ En un primer momento las instancias formales de la administración pública se modificaron sustancialmente: de doce jefes políticos que poseían gran fuerza, se pasó a una cantidad mucho mayor de presidencias municipales que carecían de ella y cuya autoridad era excedida por los caciques locales. La presencia de un elevado número de oficiales del ejército federal y de sindicatos obreros y comités

¹⁵ El grupo encabezado por Cal y Mayor y adscrito al zapatismo, sería quizá el único que escaparía a esta tendencia.

¹⁶ Antonio García de León, *op. cit.*, pp. 131-132 y 204.

¹⁷ Aquí conviene recordar que la revolución iniciada en 1910 originó cambios y permitió supervivencias, como toda revolución, y que quizá el terreno en el que las mutaciones fueron más profundas haya sido el político. Es claro que a partir de entonces nació una nueva élite identificada con el proceso revolucionario, independientemente de que sus integrantes recurran a las estructuras y prácticas tradicionales.

¹⁸ Thomas Benjamin, *op. cit.*, pp. 347-348.

agrarios que solicitaban tierras¹⁹ también favoreció la dispersión del poder y dificultó el control político.

La necesidad de ajustes incluía los planos económico y social, ya que en 1921 Chiapas continuaba siendo predominantemente rural e indígena, y la tierra seguía concentrada en muy pocas manos; la década 1910-1920 significó para la entidad una disminución demográfica, una emigración de capitalistas extranjeros que abandonaron propiedades y negocios y una disminución en el control social que se ejercía sobre los residentes de las haciendas, quienes, al parecer, aprovecharon los años de desorden para solicitar (y en muchos casos obtener) una posición política para sus comunidades o permisos para establecer pueblos independientes.²⁰

La administración *mapache* se enfrentó, pues, a múltiples problemas. Su acuerdo tácito con el centro del país le dejaba una relativa autonomía para manejar los asuntos internos y para recomponer las estructuras económicas y de poder tradicionales, insertando en ellas a las fuerzas sociales emergentes. Las organizaciones agrarias, obreras o partidistas, se convirtieron en canales modernos que, lejos de abrir espacios de participación, tendían a funcionar de acuerdo a dinámicas ancestrales.

En años posteriores, la élite local se reorganizaría y sus distintas fracciones ocuparían el poder de acuerdo a la fuerza interna que poseyeran y a las alianzas que establecieran con las corrientes que se disputaban el poder en el centro del país. Pero no obstante sus inclinaciones encontradas (de innegable alianza con los hacendados o de contenido abiertamente popular),²¹ todos los gobiernos respetaron una estructura agraria que se basaba en la concentración de la propiedad y en la sujeción económica y política de los campesinos.

Una coyuntura explosiva

El pacto que se estableció tácitamente entre la fracción hegemónica de la élite chiapaneca y los gobiernos federales surgidos de la Revolución, resultó produc-

¹⁹ Desde 1918 se habían iniciado las huelgas en las fincas del Soconusco cuando los trabajadores exigieron, entre otras cosas, la reducción de la cuerda en las tareas de limpia, atención médica, alojamientos higiénicos, eliminación de las tiendas de raya, pago en efectivo y disminución del café exigido en la pizca. De este movimiento surgió la demanda de dotaciones ejidales y se formaron los primeros comités agrarios de Chiapas. (Moisés de la Peña, *Chiapas económico*, pp. 377-378.)

²⁰ Thomas Benjamin, *op. cit.*, pp. 331-333.

²¹ En este último caso se encontraban Raymundo Enríquez y Efraín Gutiérrez. Enríquez había participado en la creación del Partido Socialista Chiapaneco y en la fundación del Sindicato de Obreros y Campesinos del Soconusco, mientras que Gutiérrez había peleado al lado de Zapata y, como amigo personal de Lázaro Cárdenas, ocupó durante los dos primeros años de gobierno de éste la presidencia del Banco Nacional de Crédito Ejidal y la Secretaría General del Departamento Agrario.

tivo para ambas partes: autonomía a cambio de recursos y lealtad era una fórmula que aseguraba a unos y otros lo que deseaban. La inserción del estado en el plano nacional se basó en ella y permitió que el paisaje local conservara la mayoría de los usos y costumbres que se habían establecido previamente. A más de setenta años de distancia, los cambios que la limitada diversificación de la economía, el crecimiento y la mayor complejidad de la sociedad, los discursos modernizantes o, en fin, el paso del tiempo obligaron a realizar, podrían interpretarse como ajustes de una estructura que, a pesar de todo, seguía siendo funcional.

Su eficacia parecía quedar comprobada en términos de la dinámica interna que reproducía las relaciones sociales y de su capacidad de inserción en un marco más amplio: en ambos planos demostró que poseía la flexibilidad para acoplarse a nuevas realidades sin perder los ejes fundamentales sobre los que se erigía. Pero la vieja frase "todo por servir se acaba" bien podría aplicarse en este caso, ya que el escenario que tantas veces se presentó como un *bunker* inexpugnable, era en realidad un espacio que por estático que pareciera, necesitaba revitalizarse para poder subsistir y que, en la medida en que las transformaciones que se producían no coincidían con las permanencias estructurales, tendió a desgastar.

El proceso que vino a condensar la erosión de una forma societal que ya había dado de sí, fue el levantamiento armado que encabezó el EZLN. Su aparición en escena mostró los límites de una estructura social que desde la década de los setenta empezó a ser fuertemente cuestionada y que hoy por hoy parece obligada a replantear sus principios. Nuestra propuesta es que si hubiera que periodizar la historia contemporánea de Chiapas, en el largo plazo podrían recuperarse los elementos de permanencia por encima de los transformadores (1870-1970), y en el corto tendría que marcarse una coyuntura en la que sin romper la imagen de continuidad (y no de inmovilidad) que ha caracterizado al estado, se incorporaran nuevos matices que dieran cuenta de un desgaste paulatino (1970-1994).

Los cuestionamientos al orden social que por distintas vías cobraron fuerza a partir de la década de los setenta, incidían directamente sobre las relaciones políticas vigentes en la entidad. En ese sentido, las dimensiones de la crisis que durante los últimos veinticinco años han acompañado al desarrollo de Chiapas eran más amplias de lo que quería verse desde la esfera gubernamental. Aunque las demandas que se hacían se referían en general a cuestiones económicas, sus implicaciones rebasaban dicho ámbito. Nuestra idea es que los problemas existentes en el marco que regulaba las relaciones de propiedad y de trabajo, iban de la mano del desgaste sufrido por los mecanismos de control social y político a los que tradicionalmente se había recurrido.

Los patrones de una sociedad agraria seguían predominando en Chiapas, de

allí que ésta funcionara como un pequeño engranaje en el que las distintas esferas que conformaban la vida local fueran interdependientes. Las estructuras imperantes requerían para subsistir de la concentración fundiaria, del mantenimiento de relaciones patrimonialistas y caciquiles como base del desarrollo económico y político y de la inserción de ese mundo con aroma de tiempos pasados en un todo quizá más moderno, pero igualmente receptivo a las aportaciones que ciertos espacios premodernos le ofrecían. Cuando se cuestionaba alguno de los elementos que daban vida al engranaje, las repercusiones eran más amplias que el punto del que salían. Los enfrentamientos sociales que han tenido lugar en las últimas décadas y que han cristalizado fundamentalmente en reivindicaciones de usufructo y propiedad de la tierra o de índole laboral, contribuyeron por lo tanto a minar las bases de la vieja estructura.

Para sintetizar la coyuntura en la que enmarcamos el surgimiento de la opción que representa el EZLN, empezariamos por insistir en que fue durante la década de los setenta cuando tomó forma el escenario en el que se desarrollarían la mayor parte de los conflictos que han dado a Chiapas un carácter de agitación casi permanente.²² A pesar de que los procesos que se han gestado a partir de entonces poseen cierto sabor local, algunos de los elementos que intervienen en ellos son fruto del contexto más amplio en el que se insertan. La ebullición que caracterizó a distintos sectores de la sociedad mexicana a partir del régimen de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), lejos de circunscribirse a un lugar de la República y a ámbitos específicos de la vida nacional, fue producto de lo que parecía una tendencia general que, con diferente intensidad y resultados, tocó a casi todos los integrantes de la Federación.

En el caso concreto de Chiapas, dos son las cuestiones que nos interesa resaltar dentro de ese espectro de mudanzas que se vivieron a raíz del ascenso de Luis Echeverría a la presidencia de la República: primero, el desfase entre una modernización acelerada que se pretendía introducir en el agro y la pervivencia de formas productivas arcaicas que obstaculizaban cualquier posibilidad de cambio en el mismo; y segundo, el desfase entre un discurso de apertura que invitaba a la participación indiscriminada de la ciudadanía y la persistencia de mecanismos de control de tipo caciquil que acabaron por limitarla.

²² Habría que recalcar que los problemas que desde entonces se han gestado en el territorio chiapaneco, asumen distintas facetas según la región de la que se trate. Mientras en la zona central y parte de la norte el tema de la tierra y de la situación de los trabajadores agrarios ocupa un lugar fundamental, en el área del Soconusco y en ciertas zonas de la selva es secundario. Lo mismo podría decirse de cuestiones más puntuales como la introducción de nuevas organizaciones religiosas, la aparición de instituciones como PEMEX y la CFE, el ingreso masivo de refugiados, las demandas magisteriales, o los cuestionamientos de índole abiertamente política, cada uno de los cuales, tiende a convulsionar de manera parcial a la entidad y sólo adquieren pleno sentido si se les relaciona con un marco más amplio en el que confluyen todas las partes de este mosaico.

Además de lo que en el plano discursivo planteaba el nuevo proyecto²³ se tomaron una serie de acciones concretas para instrumentar los programas que deseaba impulsar el gobierno federal. Se buscó interactuar con las comunidades campesinas, favoreciendo el diálogo y asignando a organismos oficiales dependientes de la Federación el papel de agentes modernizantes (Secretaría de la Reforma Agraria, CONASUPO, INMECAFE, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, BANRURAL, etcétera). Más allá de la buena o mala voluntad que haya existido al poner en práctica los programas oficiales, o de la autenticidad de los mismos como defensores de las comunidades, la modernización de la que se hablaba tenía que enfrentarse con estructuras tradicionales de gestión, que mediaban entre el propio Estado y la sociedad.²⁴ En la medida en que buena parte de la élite local (caciques, intermediarios, comerciantes, grandes propietarios, etcétera) se veía afectada, llevar los programas modernizadores hasta sus últimas consecuencias significaba declararles la guerra a los aliados de siempre y elegir a cambio el apoyo popular, situación que no sólo implicaba una violenta ruptura con respecto al orden existente, sino que estaba lejos de garantizar que el sistema en su conjunto pudiera reproducirse más adelante.

Las directrices que se enviaban desde el centro de la Federación tenían poco que ver con lo que sucedía en ese apartado lugar del sureste que, desde el siglo pasado, había seguido un ritmo de desarrollo semiautónomo y había logrado mantenerse al margen de los intentos renovadores impulsados por líderes y presidentes surgidos de la revolución.²⁵ Los tiempos, sin embargo, habían cambiado y aunque los programas que nacieron al abrigo echeverrista no

²³ Desde sus primeras giras por la entidad, Luis Echeverría planteó la necesidad de luchar porque los principios de solidaridad humana y justicia social se respetaran (6 de febrero). Asimismo, se comprometió a impulsar un programa de desarrollo integral del Sureste bajo dos aspectos: incremento de obras de infraestructura e impulso a la industrialización (3 de febrero). Y también habló de la necesidad de generar un movimiento de depuración de cada sindicato, de cada ejido, de cada cooperativa y de cada escuela (5 de febrero). (*Excelsior*, México, 3 al 7 de febrero de 1970).

²⁴ Marie Odile Marion Singer, "Pueblos en Chiapas: una democracia a la defensiva", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, vol. XLIX, núm. 4, 1987, pp. 66-67.

²⁵ Todavía al iniciar la década de los setenta, se hablaba de Chiapas como un país mágico en el que 350 000 indígenas hablaban ocho lenguas y pedían cuestiones básicas: que se ampliara la ayuda oficial para resolver sus problemas; que se les otorgaran tierras para fundar centros de población; que se mejoraran sus viviendas, caminos, escuelas primarias y para aprender oficios; y que se mejoraran las técnicas para la agricultura (15 de febrero). En las crónicas de la visita que realizó Echeverría a la entidad, se menciona la impresión que causó en él que más tarde sería Presidente el abandono en el que se encontraban los chamulas y las demandas que se le hicieron para que el Banco Ejidal pagara a los ejidatarios de Hidalgo y la Floresta, quienes vivían en la miseria, los dos millones de pesos que les adeudaba (6 de febrero). De hecho, no es casual que en una primera plana se destacan las siguientes notas: Chiapas y su miseria ante Echeverría* tiendas de raya, desempleo, discriminación* recursos ociosos por falta de crédito* 1125 peticiones al candidato en una junta. Tiendas de raya, desocupación, desplazamiento -braceros guatemaltecos trabajan por una tercera parte del salario rural-, insalubridad, alcoholismo, créditos leoninos para campe-

cuajaron,²⁶ el simple hecho de plantearlos removió descontentos ancestrales y contribuyó a generar coyunturas propicias para dar salida a inconformidades que se venían arrastrando desde antaño.²⁷

El proyecto de Echeverría, más que transformar las estructuras vigentes en el agro chiapaneco, motivó divisiones internas entre los miembros de la élite y, a la vez, abrió pequeños resquicios a las duras tapias que bloqueaban los canales de participación campesina. No se hicieron esperar los efectos desestabilizadores de una situación en la que desde el poder se perdía cohesión interna, mientras que fuera del mismo sus interlocutores aumentaban demandas y cuestionamientos que rebasaban los recursos y mecanismos a los que hasta entonces se había recurrido para mantener el control.

En este marco, las profundas contradicciones que a lo largo del tiempo se habían acumulado en la estructura agraria chiapaneca, se manifestaron con mayor fuerza a partir de la década de los setenta. Además de la acción catalizadora que para tal efecto puedan haber ejercido el programa y discurso de Echeverría, en la acentuación del desgaste de las relaciones que imperaban en el ámbito de la producción, intervino la crisis por la que atravesó la agricultura de todo el país. El resultado fue una efervescencia social de la que surgieron movimientos campesinos heterogéneos en cuanto a sus demandas y organiza-

sinos, saqueo de zonas arqueológicas y cierto tipo de discriminación y explotación de los indígenas, son los problemas lacerantes de Chiapas que hoy fueron expuestos a Luis Echeverría, en la Asamblea de Desarrollo Estatal (4 de febrero). *Excelsior*, México, 4, 6 y 15 de febrero de 1970.

²⁶ La incapacidad para llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto modernizador que se pregonaba en el plano discursivo, quedó manifiesta cuando, al terminar el sexenio de José López Portillo, el gobernador del estado (Juan Sabines) y el Presidente de la República se reunieron para evaluar las estrategias y programas prioritarios de Chiapas; el primero dijo que "marginaciones ancestrales, problemas de tenencia de la tierra, explotación y pobreza, dispersión y aislamiento, casi tienen carta de naturalización en el Estado", mientras que el segundo se expresó en los siguientes términos: "(...) muchas son las obligaciones que la República toda tiene con Chiapas, extraordinario estado que es todo potencia, pero al que le han negado, hasta ahora, los supuestos fundamentales de una estructura que lo hará viable y próspero; asimismo, dijo que dejaría la Presidencia "con la pena de no haber hecho por este estado todo lo que su conciencia le dicta y que reconozco ante ustedes públicamente". (Leopoldo Cano Contreras, "Exponen funcionarios chiapanecos a JLP la cruda realidad social de esa entidad", en *El Universal*, México, 14 de enero de 1982.)

²⁷ La introducción de tractores, motobombas, yuntas, bestias de carga, semillas mejoradas, aperos de labranza y otros insumos para la producción; o bien seguros de vida, máquinas de coser, molinos de nixtamal, láminas para techos y equipos de sonido para sus reuniones, que llegaron como resultado de los convenios de confianza agraria celebrados con 1800 ejidos, llegaron con una década de retraso como un remedo de la modernidad tan ansiada. Tal vez su presencia contribuyó a que unos cuantos mejoraran sus índices de productividad y calidad de vida pero, en el fondo, el paisaje agrario del estado conservó sus estructuras, relaciones, formas de pensar e incluso herramientas tradicionales. (Hugo Durán Cárdenas, "Fortalecimiento económico del campo y de los municipios: Juan Sabines Gutiérrez", en *El Nacional*, México, 5 de febrero de 1982.)

ción interna (por lo menos tres vertientes parecían expresarse en ellos: la étnica, la agraria y la laboral), pero con ciertas características comunes: reclamo de tierras, denuncia del aparato de control caciquil en todas sus modalidades, búsqueda de alternativas modernizantes como cooperativas de producción, sindicalización independiente, etcétera. Asimismo, por diferentes caminos cada uno de ellos tendió a trascender la lucha en la que sólo se peleaba el control de la tierra o mejoras laborales y más de una vez se incorporaron demandas que terminaban cuestionando la estructura político-administrativa oficial. Los problemas locales y regionales rebasaban el ámbito de la entidad y las movilizaciones recurrían a las instancias federales como árbitros capaces de resolver los problemas achacados al despotismo de la máxima autoridad dentro de Chiapas: el gobernador. Sobre todo, los movimientos que se afiliaron partidaria o gremialmente a órganos políticos-sindicales con difusión nacional hicieron uso de dicho recurso, mientras que los más pequeños y menos trascendentes en el plano político se mantuvieron dentro de los marcos locales y permitieron una reafirmación de los agentes caciquiles encargados de reprimirlos.²⁸

Aquellos territorios en los que se ha desarrollado la lucha agraria más intensa, son en términos generales los que a una alta concentración demográfica suman la concentración fundiaria basada en el despojo a las comunidades y en la integración de sus habitantes como fuerza de trabajo. Así, las presiones para obtener un pedazo de tierra que sembrar y mejores condiciones en el mercado laboral, han adquirido especial importancia en las zonas central y norte del estado, territorios en los que los conflictos agrarios se agudizaron hacia 1973-1974, cuando en medio de la crisis agrícola que azotaba al país y de los elementos internos que hemos ido reseñando, buena parte de los latifundios se convirtieron a la ganadería.²⁹

En la zona norte de Chiapas otro elemento que también confluyó en las movilizaciones fue la construcción de la presa hidroeléctrica Itzantún, la cual, al ocupar tierras productivas, dejó sin medios de sustento a propietarios y trabajadores de las mismas. Dos tipos de tendencias se fortalecieron en tales condiciones: la que luchaba por reivindicar la propiedad de las tierras inundadas y la que buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores empleados en las fincas mediante un programa sindical.

Aunque el procedimiento no era nuevo y ya se tenía la experiencia de la presa La Angostura que había inutilizado más de 2 000 hectáreas de tierras productivas

²⁸ Marion Singer y Marie Odile, *El movimiento campesino en Chiapas 1983*, México, CEHAM, 1984, p. 68; y "Pueblos de Chiapas, una democracia a la defensiva", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, año XLIX, núm. 4, octubre-diciembre de 1987, p. 58.

²⁹ Marion Singer y Marie Odile, *El movimiento...*, *op. cit.*, pp. 27-28.

en la depresión central, el contexto en el que se extendían los proyectos federales era distinto. A diferencia de los peones acasillados que desde tiempo atrás habían perdido el acceso a la tierra, los campesinos del centro del país conservaban parte de su patrimonio territorial y en algunos casos podían demostrar la pertenencia de los predios que les habían sido arrebatados; de allí que los intentos por recuperar los mismos se empalmaran con la lucha por la restitución de las hectáreas inundadas.³⁰ En todo caso, lo que sí unificaba a ambos grupos era la necesidad de negociar con un aparato estatal que rebasaba los límites de la entidad (recuérdese la necesidad de presionar mediante marchas a la ciudad de México) y que dejaba de ser un simple mediador ajeno a los conflictos locales (Secretaría de la Reforma Agraria) para convertirse en actor principal de los mismos (Comisión Federal de Electricidad).³¹

Tanto en los Altos como en el Norte del estado los reclamos agrarios iban desde los pliegos petitorios y las marchas, hasta las invasiones directas de las tierras en litigio o de las propiedades susceptibles de ser afectadas, pasando por la toma de edificios municipales y la retención de ganado o la interrupción del flete comercial. En ambos casos los dirigentes recibían asesoría de organizaciones campesinas independientes como la CNPA, la OCEZ o la CIOAC, situación que desde el gobierno se trató de contrarrestar fortaleciendo a las centrales oficiales (como la CNC) y que a la larga se tradujo en un fraccionamiento de campesinos que originalmente tenían objetivos similares y que por su adscripción a una u otra central se enfrentarían entre sí recurriendo incluso a la violencia.³²

El carácter heterogéneo de las movilizaciones campesinas y la inconexión en la que desde sus inicios se mantuvieron (fuera por falta de relación entre sí, fuera por su fraccionamiento), dificultaron la consolidación de un movimiento orgánico que rebasara el nivel de esa agitación permanente que surgía ante la amenaza de perder las condiciones de reproducción de los grupos y en la que se mezclaban descontentos ancestrales y de carácter estructural, con problemas más nuevos e incluso teñidos de sesgos étnico-culturales, las más de las veces sin tener identificado al enemigo ni claros los objetivos centrales de las demandas.³³

Por lo demás, el perfil inconexo de esas explosiones contestarias con las que se buscaba resolver problemas de distinta índole y la ausencia de uno o varios ejes alrededor de los cuales se aglutinaran demandas que, a pesar de sus diferencias y peculiaridades, en conjunto tendían a cuestionar la estructura que servía de base al agro chiapaneco, no impidieron que las movilizaciones iniciadas

³⁰ Marion Singer y Marie Odile, "Pueblos en Chiapas: una democracia...", *op. cit.*, p. 54.

³¹ *Ibid.*, pp. 52-53.

³² Marion Singer y Marie Odile, *El movimiento...*, *op. cit.*, p. 57.

³³ Marie Odile y Marion Singer, "Pueblos en Chiapas: una democracia...", *op. cit.*, p. 38

en la década de los setenta repercutieran en la organización social vigente. A pesar de sus limitaciones, la fuerza campesina que se había ido liberando desafiaba las formas de poder tradicionales y se volvía difícil de cooptar para los canales oficiales, que no siempre eran capaces de ocupar los espacios dejados por la erosión del mundo caciquil. En este contexto, la violencia real o potencial adquirió mayor importancia y desde los *plantones* frente a un palacio municipal, hasta las invasiones de tierras se convirtieron en retos que el sistema no siempre fue capaz de encauzar dentro de las vías legales y que tendieron a erosionar sus bases.³⁴

Los posibles alcances de la crisis

Del escenario que hasta aquí se ha dibujado se desprenden las dos vertientes que cristalizan en el movimiento encabezado por el EZLN: un desgaste estructural y la coyuntura a la que éste conduce. En los terrenos económico y social, ambas tendencias se han traducido en miseria e injusticia para buena parte de la población chiapaneca y algunos indicadores de ello pueden representarse numéricamente si se recurre a los datos que arrojó el último censo:³⁵

³⁴ Erwin Rodríguez, "En torno a los hilos delgados de la Frontera Sur: la agudización de los problemas agrarios en Chiapas durante la década de los ochenta", en Luis Hernández Palacios y Juan M. Sandoval (comps.), *El redescubrimiento de la frontera sur*, México, UAZUAM, 1989, p. 147.

³⁵ De acuerdo al último censo, el índice de analfabetismo registrado en la población chiapaneca de 15 años y más, es el más alto del país (30.1%). En términos regionales, las comunidades indígenas de los Altos son las que concentran los índices mayores (47.58%), seguida de la Selva (46.78%), Norte (37.38%) y Fronteriza (31.31%); el resto de las regiones están por debajo del promedio estatal. Los niños que no saben leer y escribir (entre 6 y 14 años) constituyen el 35.9% y el rezago educativo más alto se da en la Selva (36.3%), el Norte (33.8%) y los Altos (31.3%). Por lo que se refiere a los servicios básicos, el 42.7% carece de agua entubada, el 38.5% no tiene acceso al drenaje (conectado a la calle, conectado a fosa séptica, con desagüe al suelo, a un río o lago) y el 35.9% no cuenta con electricidad. Por lo que se refiere a las viviendas, sólo 14.1% cuenta con techo de materiales resistentes (lozas de concreto, tabique o ladrillo), el 37.1 está construida con materiales durables (tabiques, ladrillo, bloque o piedra) y el 48.7 tiene pisos de tierra. Además de los datos que se desprenden de las estadísticas, la marginalidad tiene que ver con una vida cotidiana plagada de carencias y de miseria que, entre otras cosas, pueden medirse por el precario nivel de salud de la población. (*Agenda Estadística Chiapas 1992*, México, Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas/Secretaría de Programación y Presupuesto, pp. 371-408; "Fracasan los programas de Salud para frenar el cólera en Chiapas, admiten", en *El Universal*, México, 12 de agosto de 1992; "Desnutrición y ceguera flagelan a 17 comunidades en los Altos de Chiapas", *El Universal*, México, 12 de octubre de 1992; "Aumenta en la frontera sur los casos de diarrea, sida y paludismo, dicen", *El Universal*, México, 8 de noviembre de 1992; "Seguirá sin servicios de salud el 20% de los indígenas en Chiapas", *El Universal*, México, 12 de noviembre de 1992; "Chiapas, primer lugar en enfermedades diarreicas", en *La Jornada*, México 21 de enero de 1993.)

Porcentajes Generales³⁶

<i>Lugar</i>	<i>Población</i>	<i>Población analfabeta</i>	<i>Viviendas con hacinamiento</i>	<i>Perciben menos de dos salarios mínimos</i>
Chiapas	3 210 496	30.12	74.07	80.08
Altamirano	17 026	51.79	79.95	93.53
Las Margaritas	85 586	48.37	86.36	86.20
Ocosingo	121 012	46.71	80.80	87.56
Pueblo Nuevo	17 490	50.80	79.98	88.16
San Cristóbal	89 335	24.99	60.06	71.25
Chamula	51 757	71.30	79.95	92.10

Vivienda³⁷

<i>Lugar</i>	<i>Viviendas particulares</i>	<i>Disponibilidad de agua entubada</i>	<i>Disponibilidad de drenaje</i>	<i>Disponibilidad de energía eléctrica</i>
Chiapas	594 025	346 742	244 444	397 118
Altamirano	2 928	1 501	733	756
Las Margaritas	14 309	3 812	1 339	4 712
Ocosingo	20 917	10 453	3 345	6 700
Pueblo Nuevo	3 129	2 270	649	1 407
San Cristóbal	16 580	11 957	10 912	13 708
Chamula	10 806	3 458	290	5 759

En el rubro político el panorama no mejora, aunque en este caso las cifras disponibles escondan las limitaciones que existen en Chiapas para ejercer la ciudadanía. Se supone que en las elecciones presidenciales de 1976, 1982 y 1988, Chiapas contribuyó respectivamente con el 98, 90 y 87 por ciento de su vota-

³⁶ Fuente: *Chiapas y la transición democrática: ¡Libertad!, ¡Justicia!, ¡Democracia!*, México, Grupo Parlamentario del PROLV Legislatura. 1994, p. 45.

³⁷ Fuente: *Agenda estadística Chiapas...*, op. cit., pp. 373-378.

ción interna al triunfo priista, aunque en el mismo lapso los índices de abstencionismo fueron del 32, 18 y 48 por ciento, respectivamente. La situación es similar en lo que se refiere a las diputaciones federales: en 1976, 1979, 1982, 1985 y 1988 se repiten proporciones altas para el partido oficial (96, 95, 91, 88 y 90 por ciento, respectivamente) y porcentajes también elevados de abstencionismo (34, 42, 37, 41 y 48 por ciento).

En lo que respecta a los comicios locales, las tendencias apuntadas tienen validez si se consideran los promedios: en 1979, 1982, 1985 y 1988 el 96, 88, 93 y 85 por ciento de los votos, respectivamente, fueron para el PRI y el abstencionismo se mantuvo en 51, 52, 47 y 61 por ciento. Sin embargo, los matices regionales en este caso son importantes, ya que en algunos de los municipios es posible observar la relativa pérdida de control por parte del partido oficial o, incluso, su desplazamiento como fuerza dominante (no, por cierto, en los que se encuentran en conflicto).³⁸ En cuanto a los niveles de abstencionismo, las desviaciones son muy grandes (oscilan entre un 9 y un 86 por ciento) y aquí sí tiende a incrementarse el porcentaje en las zonas en conflicto.

Niveles de abstencionismo³⁹

Lugar	1979	1982	1985	1988
Altamirano	43	20	39	15
Las Margaritas	26	50	57	67
Ocosingo	35	83	41	75
Pueblo Nuevo	37	35	31	64
San Cristóbal	91	74	56	78
Chamula	19	17	25	6

La aparente incongruencia entre un plano electoral en el que el partido oficial muestra su predominio y el surgimiento de una insurgencia armada que se le opone, sólo puede entenderse si se acepta que los marcos institucionales no representan canales adecuados para participar políticamente. Este punto nos parece importante, porque si bien el eje aglutinador del movimiento se nutre de la miseria y del abandono en los que vivían sus integrantes, la necesidad de plantear sus demandas con las armas de por medio nace de las limitaciones del modelo político.

³⁸ Fuente: Francisca Alicia Pérez Grovas, *Elecciones locales y elecciones federales: un estudio comparativo (1976-1989)*, Tesis para optar al grado de maestra en Estudios Regionales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1991.

³⁹ *Idem*, p. 132.

Hay que marcar explícitamente que además de los problemas económicos y sociales, el conflicto surge porque el Estado mexicano no cumplió de manera eficiente su tarea de institucionalizar la vida pública, de monopolizar la violencia y de fungir como árbitro capaz de evitar que ciertos grupos se apoderaran del espacio público como si fuera privado.

Desde nuestro punto de vista, ésta es la parte del análisis que diluyen quienes reprochan al EZLN el uso de la fuerza, aunque reconozcan la justeza de sus peticiones. Compartimos con ellos la condena a un mecanismo que provoca dolor, muerte y destrucción; discrepamos de ellos en cuanto a que los sublevados tenían otras opciones. La violencia forma parte del paisaje chiapaneco desde hace años y se ha utilizado precisamente para evitar cualquier posibilidad de establecer relaciones sociales más equitativas. Responsabilizar a quienes durante años han sido agredidos y han tenido que soportar prácticas autoritarias, por no sujetarse a las reglas de una pretendida democracia y acusarlos de impedir con sus actos que se avance hacia ella, es invertir el orden de los factores, situación que en este caso sí altera el producto.

Tal vez había otros escenarios posibles. Aunque las condiciones estaban dadas tanto en el plano económico-social (desgaste de las relaciones estructurales, situaciones de extrema pobreza, descontento y movilizaciones, e incluso un desfase con el discurso modernizador de los últimos años) como en el político (debilitamiento de los mecanismos de control, insuficiencia de los canales de participación y presencia de agentes políticos que condensaban todo lo anterior), cabía la posibilidad de que se hicieran los ajustes necesarios para refuncionalizar las contradicciones y que, a pesar de su erosión, en el proceso se utilizaran los canales institucionales.

Lo local y lo nacional: las dos caras de la moneda

Ahora ya sabemos el rumbo que tomó una historia en la que la insatisfacción de la gente fue llevada hasta el límite; todavía no conocemos su final, pero podemos adelantar algunas hipótesis al respecto. En primer lugar, creemos que los alcances democratizadores del movimiento armado rebasan las posibilidades del EZLN y dependen sobre todo de la presión que se ejerza desde la sociedad. Depositar en un pequeño grupo que combate en la frontera sur nuestros anhelos de apertura, constituye una actitud que carece de sustento. Si bien no compartimos la idea de que el conflicto chiapaneco se restringe al plano local, tampoco estamos de acuerdo con una potencialización del mismo que ampliaría mecánicamente sus alcances al terreno nacional.

Es cierto que el modelo impuesto en los últimos sexenios ha incrementado los niveles de descontento en amplios sectores de la población y que la

legitimidad del EZLN ha crecido por ello; sin embargo, cabe preguntarse cuántos de los simpatizantes del movimiento estarían dispuestos a unirse a él, en el caso de que su actitud implicara algo más que un apoyo moral. El principal compromiso de los combatientes es con la pequeña sociedad de la que surgieron y en la que se encuentran sus bases; si las demandas que presentan rebasan las fronteras chiapanecas, ello se debe a la imposibilidad de resolver los problemas del estado abstrayéndose del marco más amplio en el que se gestaron.

La postura que el gobierno ha adoptado para manejar el conflicto muestra, mejor que todos los escritos zapatistas, que los caminos para poner fin a la guerra pasan por el centro del país. Resulta particularmente claro que mientras el presidente de la República hace gala de su poder omnímodo (recuérdense las legislaciones al vapor impuestas en contra del sentir popular y/o las campañas represivas que el Poder Judicial ha dirigido en los últimos meses y que han surgido de decisiones tomadas por el Ejecutivo), se pretenda negociar la democratización de un territorio en el que se han exacerbado las perversidades del sistema político mexicano, fingiendo que este último rebasa el escenario en el que los indígenas desafiaron el *statu quo*.

Los problemas de Chiapas tienen que ver con los problemas de México y separarlos artificialmente conduce a una pérdida de rigor analítico, disminuyendo por lo tanto las posibilidades de encontrar salidas viables. Sin embargo, olvidar que el EZLN posee un sabor local intransferible, equivale a traspolar, también artificialmente, la experiencia histórica concreta que condujo a los indígenas chiapanecos a levantarse en armas. Los ejes que articulan su lucha combinan un carácter particular, producto de las condiciones específicas en las que se han insertado en la estructura social, con condiciones generales que pueden ser compartidas por otros indígenas y sectores amplios de mexicanos. Las demandas que estos últimos recuperan a partir de la experiencia zapatista son legítimas, pero para conseguir que sean satisfechas se requiere de un trabajo de organización y fortalecimiento previo. El conjunto de la sociedad mexicana tiene que avanzar en ese sentido para construir el México económica, social y políticamente más justo que todos deseamos y que difícilmente podrá erigirse de manera exclusiva a partir del movimiento chiapaneco.

En otras palabras, aunque Chiapas se encuentra en el ojo del huracán que ha desatado una crisis para el conjunto del sistema político mexicano y las demandas que desde la Selva Lacandona se han planteado subsumen situaciones y sentires que se extienden por todo el país, desde nuestro punto de vista la opción que ofrece el EZLN sigue vinculada al terruño en el que nació. Para ampliar el círculo se necesita una organización social que hasta ahora no ha logrado cuajar. La responsabilidad por los procesos de democratización y cambio que requiere México, cada vez con mayor urgencia, no puede depositarse sólo en

un movimiento armado cuya zona de influencia militar se circunscribe fundamentalmente al territorio chiapaneco, aun cuando en términos del proyecto que representa su incidencia sea más amplia.

Si volvemos la mirada hacia el plano local, entendido en la línea que hemos apuntado, parecería que incluso aquellos que rechazan la violencia y critican indiscriminadamente su uso, tienen que reconocer que las armas se convirtieron en el mejor micrófono de quienes no habían sido escuchados antes. Queda la gran interrogante de hasta qué punto serán atendidos sus reclamos; la respuesta está en el aire y depende de una negociación en la que además de las cabezas visibles, hay que considerar intereses ocultos que pueden inclinar la balanza. Por lo que hemos visto, creemos que las viejas formas de manejar la dominación serán replanteadas. Dudamos, sin embargo, que la marginalidad sea combatida desde las estructuras, aun cuando la élite local sea sacrificada.

La familia chiapaneca es una de las protagonistas centrales del mundo de injusticias que combaten los zapatistas, pero su caída no significa el desmantelamiento de la estructura de poder que la encumbró. Debemos insistir en que su existencia es coherente con el sistema político mexicano y que este último ha utilizado en su favor esos arcaísmos que ahora debe combatir. El derrumbe de la élite no basta para resolver los problemas por la tierra que se han generado a través de los años, ni para cambiar abruptamente relaciones hondamente arraigadas, mucho menos para acabar con instituciones y prácticas informales que han contribuido al fortalecimiento del sistema en su conjunto.

En función de estos elementos, nos parece que las posibilidades de democratizar la vida local, con todo lo que ello implica, son también limitadas si el movimiento se restringe a la lucha zapatista. La necesidad de cambios no puede soslayarse, menos ante la amenaza de la guerra, pero de no cambiar el *impasse* por el que atravesamos, las transformaciones que se pongan en marcha difícilmente irán más allá de mejorar el paupérrimo nivel de vida de la población.

La estrategia del gobierno ha sido muy clara: aislar, tanto militar como discursivamente, al movimiento y restarle fuerza a través de la represión abierta y/o de la cooptación de sus simpatizantes o posibles apoyos. En parte, el objetivo se ha logrado y con la ayuda de los medios masivos de comunicación se ha montado una campaña que busca subvaluar la capacidad del EZLN y desprestigiar a sus integrantes. La torpeza con la que se han manejado las acciones oficiales, ha significado sin embargo que amplios grupos de la opinión pública nacional e internacional rechacen medidas e interpretaciones aparentemente apegadas al texto de la ley, pero que en el fondo constituyen demostraciones de un poderoso Goliath empleando toda su fuerza para derrotar las hondas de los muchos herederos de David que se le han enfrentado (la orden de aprehensión dictada contra dirigentes zapatistas, la captura de supuestos líderes del movi-

miento y la descalificación de los indígenas a los que se acusó de ser acarreados en San Andrés Larrainzar, son sólo algunos ejemplos).

Así pues, podríamos afirmar que el aparato estatal carece de la legitimidad necesaria para derrotar por completo al EZLN y, sobre todo, para cortar de raíz el proyecto que representa. En el otro extremo, los zapatistas tampoco cuentan con la capacidad militar o política para imponerse. Se trata de un equilibrio desigual que, mientras la sociedad permanezca inmóvil, favorece a quienes buscan reproducir el tipo de relaciones e instituciones existentes. El gobierno ha tratado y seguirá tratando de aprovechar la relativa ventaja que le brindan las inercias sociales. Su principal objetivo dentro de la entidad se reduce a impulsar programas que aseguren la gobernabilidad y que permitan reconstruir las intermediaciones perdidas. En este punto nos parece que la posición oficial aceptaría negociar espacios políticos para caminar en dicha dirección, aunque ello implicara perder la hegemonía priista y establecer coaliciones electorales.

No creemos que los indígenas sublevados compartan dicha salida, pero dudamos de la voluntad de sus interlocutores para establecer cambios profundos en la estructura de poder local y, dados los pesos y contrapesos actuales, el EZLN difícilmente obtendrá mayores concesiones sin contar con un apoyo amplio, decidido y organizado en el plano nacional. Mientras tanto, el tiempo corre y día con día observamos cómo la violencia y la represión aumentan; con la misma periodicidad nuestro optimismo tiende a caer y, no obstante nuestra simpatía abierta hacia las propuestas zapatistas, nuestra certidumbre de su justeza y nuestra esperanza, dictada más por el corazón que por la razón, de que se les atienda, nos parece poco probable que ello suceda.

Deseamos que la realidad nos refute y que fructifiquen las esperanzas que el movimiento chiapaneco ha sembrado. Es posible, si la sociedad despierta de su letargo y toma el papel protagónico que le corresponde. La acelerada descomposición del sistema político mexicano favorece esta posibilidad y nos brinda la opción de construir un nuevo régimen que incorpore las demandas de quienes desde un apartado lugar del sureste han debido tomar las armas para hacerse oír. Ojalá que nuestro pesimismo sea rebasado por un futuro en el que no haya necesidad de derramar más sangre para alcanzar una vida digna; ojalá que se incorpore la experiencia de los indígenas chiapanecos en el marco continental; ojalá que de aquí en adelante luchemos todos porque este tipo de salidas desaparezcan del horizonte; ojalá, en fin, que desde el Río Bravo hasta la Patagonia podamos edificar sociedades más justas y seamos capaces de exigir, construir y utilizar canales institucionales, a los que podamos acudir con la certidumbre de que se nos tomará en cuenta y de que nunca más habrá necesidad de morir por su ineficiencia.